

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 29 de enero de 2021.

Auto Interlocutorio No. 029

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76-001-33-33-0015-2019-00184-01
DEMANDANTE:	SOCIEDAD ARROYOHONDO DOS MIL S EN C.S.
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE YUMBO
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 746 del 12 de diciembre de 2019¹ proferido por el Juzgado Quince Administrativo Oral de Cali, que rechazó la demanda.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial la Sociedad Arroyohondo Dos Mil S en C.S. demandó al Municipio de Yumbo (Valle del Cauca) y solicitó que se declare la nulidad total y por consiguientes se disponga que cesen los efectos jurídicos de los siguientes actos administrativos proferidos por la Tesorería y/o Secretaría de Hacienda Municipal:

- Liquidación Oficial nro. 201404881 del 2 de marzo de 2015.
- Resolución de mandamiento de pago nro. 121.26.04.1-0206 de 8 mayo de 2017.
- Resolución de embargo nro. 121-31-08-1580 del 2 de mayo del 2019.
- Resolución nro. 121-31-08-1270 del 30 de mayo de 2019.
- Auto aclaratorio nro. 121-31-08-0022 del 6 de junio de 2019.
- La totalidad del expediente coactivo nro. 4881-38870.660 respecto del predio identificado con el código catastral (040100031289000) actual (000300050766000).

Como restablecimiento del derecho, solicitó se declare la terminación del proceso coactivo, respecto del predio identificado con el código catastral anterior (040100031289000) actual (000300050766000) con relación a las vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014 por concepto de impuesto predial unificado, sobretasa de bomberos, y medio ambiente e intereses y, expedir el paz y salvo.

De igual forma, solicitó que se declare la prescripción de la liquidación oficial nro. 201404881 del 2 de marzo de 2015 y la acción de cobro del impuesto predial unificado, sobretasa de bomberos, y medio ambiente e intereses de las vigencias liquidadas o por liquidar del año 2011, 2012, 2013

¹ Ver folios 64 a 65

y 2014 del predio (040100031289000) actual (00030050766000) y, expedir el paz y salvo.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

El Juzgado Quince Administrativo Oral de Cali mediante auto nro. 746 del 12 de diciembre de 2019, rechazó la demanda al considerar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, los actos proferidos en la etapa de cobro coactivo sólo pueden ser demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los que deciden las excepciones a favor del deudor, y los que ordenan llevar adelante la ejecución. En ese orden de ideas con fundamento en la providencia del 15 de mayo de 2019, radicación nro. 05001-23-33-000-2014-01403-01 (22843) proferida por el Consejo de Estado, concluyó que los actos administrativos demandados no eran susceptibles de control jurisdiccional.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte recurrente lo siguiente:

“...De acuerdo con el contenido antes transcrito de la providencia en cita, la conclusión de que en el cobro coactivo sólo son demandables “las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución”, se la acaba de inventar el Juzgado, sustituyendo no sólo al órgano de cierre de lo contencioso administrativo, sino también al legislador como pasa a explicarse.

Si bien el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, indica que “Solo serán demandables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la parte segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito”, no es menos válido acudir que del inciso 2° y el numeral 1° del mismo precepto se infiere que también son objeto de demanda los actos que constituyen el título ejecutivo, como las liquidaciones oficiales.

(...)

Significa lo anterior su señoría que la Liquidación Oficial nro. 201404881 del 2 de marzo de 2015 como acto administrativo “definitivo que constituye título ejecutivo” es controlable por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, junto con los demás actos posteriores que se expidieron en razón de esta, dado que lo accesorio sigue la suerte lo principal.

De ser válida la interpretación miope que realiza el despacho, en la que finca sus razones de rechazo, de seguro el inciso 2 y el numeral 1 del artículo 101 instituidos por el legislador, sobrarían...”²

V. CONSIDERACIONES:

a. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

b. PROBLEMA JURÍDICO

En el presente caso, el problema jurídico se contrae en determinar si en el presente caso es proceden rechazar la demanda por considerarse que todos los actos demandados son de ejecución y por tanto, no pueden ser objeto de control judicial.

c. MARCO JURISPRUDENCIAL

² Ver folios 67 a 69

- **ACTOS SUSCEPTIBLES DE CONTROL DE LEGALIDAD ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**

“...De acuerdo con el artículo 43 del CPACA, los actos definitivos susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son “los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”. Así pues, un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es una declaración de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas, mientras que los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado. De acuerdo con lo anterior, únicamente las decisiones de la Administración, producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la continuación de esa actuación o que decidan de fondo el asunto, son susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que, dicho de otra manera, significa que los “actos preparatorios, de trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a preparar, impulsar la actuación administrativa, o dar cumplimiento a la decisión no son demandables”...”³

- **DEL ACTO DE EJECUCIÓN Y SU ENJUICIAMIENTO CUANDO SE ERIGE COMO VERDADERO ACTO DEFINITIVO.**

“...se ha definido por acto administrativo «toda manifestación de la administración con capacidad para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, esto es, una decisión encaminada a producir efectos jurídicos en los derechos u obligaciones de los administrados, sean subjetivos, personales, reales o de crédito»⁴

(...)

De esta manera encontramos dentro de la clasificación de los actos administrativos, una pluralidad de ellos como son: los de carácter general, los particulares, los actos definitivos, los de trámite, preparatorios y los de mera ejecución.

(...)

*En ese orden, se tiene que los actos administrativos fueron regulados por el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, definiéndolos como aquellos «**que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación**», por lo tanto, son decisiones susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo estipulado en el citado artículo.*

(...)

*De otra parte, existen **los actos de ejecución** que, como su nombre lo indica, son aquellos que materializan una decisión ya sea de carácter administrativo o judicial.*

En ese sentido, los actos de ejecución no crean, modifican o extinguen situación jurídica alguna y por tanto, no son objeto de control jurisdiccional.

(...)

La jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el acto de ejecución carece de control por vía de acción, lo cual se adecúa a la definición ya expuesta, y así mismo a su tratamiento procesal dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyas reglas adjetivas impiden que este tipo de decisiones sean susceptibles de discusión administrativa⁵.

(...)

Así las cosas, en principio los actos administrativos de ejecución no son demandables; sin embargo; si la administración al proferirlo se aparta del verdadero alcance de la

³ Consejo de Estado. Sección Cuarta. Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Bogotá D.C., treinta y uno de mayo (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 05001-23-33-000-2013-01824-01(23590). Actor: INMOBILIARIA MERCANTIL Y CIA LTDA EN LIQUIDACIÓN. Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN.

⁴ La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 12 de junio de 2008, expediente 16288, CP Dra. Ligia López Díaz.

⁵ Artículo 75 Ley 1437 de 2011.

decisión, agregando o suprimiendo algo, resulta incuestionable que el acto no es de simple ejecución como quiera que nace a la vida jurídica una nueva decisión de la administración que sería controvertible ante la jurisdicción...⁶

En virtud de lo expuesto, debe indicarse entonces que el artículo 169, numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que la demanda podrá ser rechazada cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.

Ahora bien, El Honorable Consejo de Estado ha definido el acto administrativo como la manifestación de voluntad de la Administración, que contiene una decisión expresada en la forma prevista en la ley y que tiene la virtualidad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en situaciones generales o particulares para los administrados o para la propia Administración, cuyo contenido se presume ajustado a derecho, mientras no sea anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo⁷.

Dicha Corporación también ha sido enfática en señalar que los únicos actos administrativos enjuiciables son los de carácter definitivo⁸, los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación.

En consonancia con lo anterior, se tiene entonces que esta jurisdicción es la encargada de realizar el control de legalidad de los actos administrativos definitivos, entendidos estos como la manifestación de voluntad de la Administración, generadora de efectos jurídicos.

En cuanto a los actos administrativos de ejecución, estos no se consideran definitivos, por cuanto no definen una situación jurídica diferente a la que ya fue resuelta previamente, en cumplimiento de una sentencia o una conciliación judicial⁹. Sin embargo, hay lugar a estudiar la legalidad de este tipo de decisiones de la Administración cuando exceden, parcial o totalmente, lo dispuesto en la orden judicial, comoquiera que, de tal modo, se estaría creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica diferente¹⁰.

3.1 CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328¹¹ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306¹² del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose **solamente** sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

En el presente asunto, según lo consignado en la demanda la parte demandante pretende la nulidad de los actos administrativos proferidos dentro del expediente de cobro coactivo nro. 4881-38870.660 adelantado respecto al pago del impuesto predial unificado, sobre tasa de bomberos y medio ambiente durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, respecto del predio identificado con el código catastral anterior (040100031289000) actual (000300050766000).

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección B. Consejera Ponente: Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá D. C., once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 44001-23-33-002-2015-00013-00(326515), Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP. Demandado: MARÍA NERY GIRALDO GÓMEZ. Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Trámite: Ley 1437 de 2011. Asunto: Apelación del auto que rechazó la demanda al estimar que son actos de ejecución. Acto de ejecución no es susceptible de control jurisdiccional. Decisión: Revoca auto.

⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2012, Consejera Ponente Dra. RUTH STELLA CORREA PALACIO, radicación número 05001-23-26-000-1994-00558-02 (20810).

⁸ Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 15 de mayo de 2014, Consejero Ponente Dr. HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS, radicación número 20001-23-33-000-2013-00005-01.

⁹ Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B – auto del 8 de febrero de 2012 – Consejera Ponente RUTH STELLA CORREA PALACIO – radicación nro. 15001-23-31-000-1997-17648-01 (20689).

¹⁰ Consejo de Estado – Sección Cuarta – auto del 26 de septiembre de 2013- Consejero Ponente JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ- radicación nro. 68001-23-33-000-2013-00296-01 (20212).

Consejo de Estado, Sección Segunda – auto del 9 de abril de 2014 – Consejero Ponente LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, radicación nro. 73001-23-31-000-2008-00510-01 (1350-13).

Consejo de Estado – auto del 9 de febrero de 2017 – Consejera Ponente SANDRA LISSET IBARRA BÉLEZ – radicación nro. 05001-2333-000-2013-00343-01 (0952-2014).

¹¹ ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella."

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

¹² ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Como restablecimiento del derecho solicitó la terminación y archivo del proceso coactivo, además de la prescripción de la liquidación oficial nro. 201404881 del 2 de marzo de 2015 y la acción del impuesto predial unificado.

Ahora bien, mediante auto interlocutorio nro. 746 del 12 de diciembre de 2019 el *a quo* decidió rechazar la demanda al considerar que de conformidad con lo consagrado en el artículo 101 del CPACA, ninguno de los actos administrativos demandados es susceptible de control jurisdiccional, argumentando que sólo pueden ser demandados ante esta jurisdicción los actos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.

Inconforme con esta decisión, el apelante sustentó que el *a quo* realizó una errónea interpretación de la providencia emitida por el Consejo de Estado y que sirvió de fundamento para su decisión, al considerar que en la misma se avalan las liquidaciones oficiales como actos definitivos constitutivos de títulos ejecutivos y por tanto, controlables por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Añade que del inciso segundo del numeral primero del artículo 101 del CPACA, también se infiere que son objeto de demanda los actos que constituyen el título ejecutivo, como las liquidaciones oficiales. Concluyendo que la liquidación oficial nro. 201404881 del 2 de marzo de 2015 es un acto definitivo que constituye título ejecutivo y, por tanto, puede ser demandado ante esta jurisdicción junto con los demás actos posteriores que se expidieron en razón a este, dado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Establecido lo anterior, es preciso indicar que de acuerdo con el artículo 43 del CPACA, los actos definitivos susceptibles de ser demandados ante esta jurisdicción son “(...) *los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación* (...)”.

Así entonces, un acto administrativo definitivo, es aquel que contiene una decisión de la entidad dirigida al ejercicio de la función pública y que produce efectos jurídicos, es decir que crea, reconoce, modifica o extingue una situación jurídica, contrario a los actos de ejecución que se limitan a impulsar o dar cumplimiento una decisión administrativa o judicial, sin que de él surjan nuevas situaciones. En tal razón, sólo serían demandables ante esta jurisdicción, aquellos actos administrativos que decidan de fondo un asunto en particular.

Respecto de los actos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo que son susceptibles de control judicial ante esta jurisdicción, tenemos que el artículo 101 del CPACA dispone lo siguiente:

*“ARTÍCULO 101. CONTROL JURISDICCIONAL. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la parte segunda de este código, **los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito**”. La admisión de la demanda contra los anteriores actos o **contra el que constituye el título ejecutivo** no suspende el procedimiento de cobro coactivo...”* (Negrilla y subraya fuera de texto).

Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido que si dentro del procedimiento de cobro coactivo se ha proferido un acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica particular diferente a la ejecución de la obligación tributaria sería posible estudiar su legalidad por el Juez. Así lo ha expresado la jurisprudencia de esta Sección al indicar que:

“(...) dentro del procedimiento administrativo de cobro pueden expedirse actos administrativos que no versen sobre la ejecución propiamente dicha de la obligación tributaria, pero que sí

constituyen una verdadera decisión de la Administración, susceptible del control jurisdiccional, en tanto afectan derechos, intereses u obligaciones de los contribuyentes o responsables del impuesto.

Por eso, en aras de la protección jurídica de controversias independientes a la ejecución de la obligación tributaria, son demandables ante esta jurisdicción los actos administrativos definitivos, expedidos por la Administración Tributaria de conformidad con lo estipulado en el artículo 43 de la Ley 1437, tesis que reitera la Sección en esta providencia”¹³, ”¹⁴

Ahora bien, de las pruebas aportadas se tiene que el Municipio de Yumbo – Secretaría de Hacienda profirió liquidación oficial nro. 201404884 del 2 de marzo de 2015¹⁵ en nombre de la señora María Eugenia Ramos Giraldo como propietaria del predio identificado bajo el nro. 000300050766000 registrado en la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por valor adeudado de \$145.197.179 al ser sujeto pasivo del impuesto unificado, sobretasa de bomberos, y medio ambiente.

Posteriormente, luego de quedar en firme dicha liquidación la entidad demandada, mediante oficio nro. 121.26.04.1 del 7 de mayo de 2017¹⁶ libró mandamiento de pago en su favor y a cargo de la señora María Eugenia Ramos Giraldo por la deuda del impuesto predial unificado para las vigencias 2011 a 2014, ordenado su notificación personalmente.

El 2 de mayo de 2019¹⁷ se profirió resolución de embargo a nombre de la contribuyente María Eugenia Ramos Giraldo, quien se opuso al proceso coactivo, al embargo y gravamen por concepto del impuesto predial unificado respecto del predio en cuestión, argumentando que que no poseía título de propiedad o posesión del bien inmueble objeto del impuesto, pues mediante escritura pública nro. 0734 del 4 de abril de 2009, otorgada en notaria única del Municipio de Yumbo a título de venta se había trasladado la propiedad a la **Sociedad Arroyondo Dos Mil S. EN C.S.**

Ante dichas afirmaciones, la Alcaldía del Municipio de Yumbo expidió la Resolución nro. 1720 del 30 de mayo de 2019¹⁸ ordenando el levantamiento de las medidas cautelares de embargo de cuentas bancarias dictadas contra María Eugenia Ramos Giraldo al no ser la propietaria del predio nro. 000300050766000.

Finalmente, la entidad demandada profiere auto aclaratorio nro. 0022 del 6 de junio de 2019¹⁹ sobre el mandamiento de pago anteriormente citado, disponiendo que una vez verificada las piezas procesales que conformaban el expediente y la base de datos se aclaró que el nombre válido era **Sociedad Arroyohondo Dos Mil S. EN. C.S.**, ordenando continuar con el proceso de cobro coactivo. Contra este auto la señora María Eugenia Ramos Giraldo interpuso los recursos de reposición y apelación²⁰.

En razón a las pruebas aportadas, es claro para esta Corporación que si bien el demandante hace alusión a la nulidad de unos actos administrativos, que tal como lo indicó el A-quo, no son susceptibles de control judicial conforme al Art. 101 del CPACA en la etapa de cobro coactivo, lo cierto es que existe uno de ello que si lo sería, por las siguientes razones a saber:

¹³ Auto del 24 de octubre de 2013 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado número: 25000 23 37 000 2013 00352 01 (20277). Actora: María Nieves Cañón Castiblanco. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En esta decisión, el Consejo de Estado revocó el auto que rechazó la demanda proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por considerar que la decisión de la DIAN de negar la solicitud de prescripción de la obligación tributaria dentro del procedimiento de cobro coactivo es un acto administrativo definitivo susceptible de control judicial.

¹⁴ Consejo de Estado. Sección Cuarta. Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Bogotá D.C., treinta y uno de mayo (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 05001-23-33-000-2013-01824-01(23590). Actor: INMOBILIARIA MERCANTIL Y CIA LTDA EN LIQUIDACIÓN. Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN.

¹⁵ Ver folios 12, 26 Y 27

¹⁶ Ver folio 13, 29 , 30, 33, 34 y 35

¹⁷ Ver folio 14

¹⁸ Ver folios 20 y 21

¹⁹ Ver folios 22 y 50

²⁰ Ver folios 23 a 25



Lo primero que hay lugar a señalar es que la liquidación oficial es el medio a través del cual, previo el agotamiento de una serie de etapas se determina oficialmente el impuesto al contribuyente que persiste en la omisión de presentar el denuncia tributario. En consecuencia, y de conformidad con lo anterior, no se puede calificar la Liquidación Oficial como un acto expedido dentro del trámite administrativo de cobro, toda vez que como lo ha sostenido el Consejo de Estado el “procedimiento de cobro coactivo” no tiene por finalidad la declaración o constitución de obligaciones o de derechos, sino hacer efectiva mediante su ejecución, las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, previamente definidas a favor de la entidad territorial y a cargo de los contribuyentes en el respectivo título ejecutivo. Por lo tanto, la Liquidación Oficial es una actuación previa e independiente a los actos que se susciten en el proceso tendiente a ejecutar su cobro y, por lo mismo, es susceptible de control de legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Partiendo de tal premisa y sin desconocerse por parte de este Tribunal lo confuso no solo de los hechos y pretensiones de la demanda, sino también de la actuación adelantada por la parte demandada en el proceso de cobro coactivo, lo cierto es que mediante el auto aclaratorio nro. 0022 del 6 de junio de 2019²¹ además de corregirse el yerro cometido frente a la parte pasiva objeto del tributo en el trámite del cobro coactivo, también corrigió “implícitamente” la actuación previa del mismo, esto es, el acto de la liquidación oficial que en principio estaba direccionada en contra de María Eugenia Ramos Giraldo y posteriormente a raíz del acto aclaratorio se direcciona contra la aquí demandada y que valga resaltar, en últimas constituye título ejecutivo para adelantar el proceso de cobro coactivo.

Sobre el particular, el auto aclaratorio nro. 121-31-08-0022 del 6 de junio de 2019 dispuso en su parte resolutive lo siguiente:

*“...ARTÍCULO PRIMERO: **Aclarar** que el nombre del propietario y/o poseedor inicialmente citado en la **aparte considerativa de este mandamiento de pago** nro. 121.041-0206 de fecha mayo 08 de 2017, que respondía al nombre de María Eugenia Ramos Giraldo y que una vez verificada las piezas procesales que conforman el expediente y la base de datos de la oficina, **se aclara que el nombre válido es Arroyohondo Dos Mil S. EN C.S.***

*ARTÍCULO SEGUNDO: **Continuar con el proceso de cobro coactivo.***

*ARTÍCULO TERCERO: **Librar los oficios necesarios para dar cumplimiento a la presente providencia...**” (Subraya y negrilla fuera de texto).*

En el mismo sentido, se observa que mediante oficio del 06 de junio de 2019 (fl. 50) se citó a la parte demandada para que se notificara del referido acto aclaratorio, haciéndole saber que “de no comparecer (sic) el proceso continuará con **el embargo, secuestro y remate del bien**”

Así entonces, es evidente que el único acto susceptible de control judicial resulta ser la Liquidación oficial nro. 201404881 del 2 de marzo de 2015²² que surtió sus efectos en contra de la parte demandada una vez se notificó el Auto aclaratorio nro. 121-31-08-0022 del 6 de junio de 2019²³ y ello es así, sencillamente si a bien se tiene que en este último acto se estipuló que se continuaba con el proceso de cobro coactivo, sin que exista en el dossier los actos subsiguientes al mismo, es decir, no se tiene la certeza si dentro del proceso de cobro coactivo se otorgó la posibilidad a la aquí demandada a interponer las excepciones a que hubiere lugar, y en el hipotético caso, el acto que las resolvió, si sería susceptible de control judicial en los términos del art. 101 del CPACA.

²¹ Ver folios 22 y 50

²² Ver folio 12.

²³ Ver folio 22.

En todo caso, en virtud de garantizar el principio *pro actione*, no se puede perder de vista que en la liquidación oficial se identificó en todo momento como sujeto pasivo del impuesto a la señora María Eugenia Ramos Giraldo, aparentemente poseedora del predio identificado con el nro. 000300050766000 registrado en la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo que impidió que la sociedad actora demandara en dicho momento este acto administrativo al no ser sujeto pasivo del mismo, ni tener conocimiento de su existencia y del cual, se insiste, solo lo conoció en virtud del ya mencionado acto aclaratorio.

Entendiéndose entonces que el acto administrativo objeto de ser demandado en el presente asunto es aquel que afectó los derechos, intereses u obligaciones de la sociedad Arroyohondo Dos Mil S. en C.S., al momento de reconocerlo como sujeto pasivo del impuesto a la sobretasa de bomberos y medio ambiente, lo que sucedió con la expedición del acto aclaratorio Nro. 121-31-08-0022 del 6 de junio de 2019, donde se le identificó como propietario del predio Nro. 000300050766000 y como consecuencia de ello, hay lugar a tener como demandado el acto primigenio o principal de la liquidación oficial del 2 de marzo de 2015, pues es en éste en que se estipula las consideraciones y motivaciones de imposición del tributo.

En consecuencia, se revocará la providencia apelada para en su lugar, ordenar al Juez de primera instancia que, en este caso realice el estudio respecto a la admisión de la demanda frente al acto administrativo que puede ser objeto de control jurisdicción (el Auto de la Liquidación Oficial del 2 de marzo de 2015), garantizando en todo momento el acceso a la administración de justicia y contando la caducidad desde el momento en que se notificó el Auto aclaratorio nro. 121-31-08-0022 del 6 de junio de 2019²⁴.

Por último, frente a los demás actos acusados a este Tribunal no le resta salida diferente que confirmar el auto apelado, ello en virtud que el texto del art. 101 del CPACA es claro y explícito en señalar que dentro del trámite coactivo sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito situación que en contraste con las pretensiones de nulidad de la i) resolución de mandamiento de pago nro. 121.26.04.1-0206 de 8 mayo de 2017, ii) resolución de embargo contra la señora MARIA EUGENIA RAMOS GIRALDO nro. 121-31-08-1580 del 2 de mayo del 2019, iii) Resolución de levantamiento de embargo a favor de la señora MARIA EUGENIA RAMOS GIRALDO nro. 121-31-08-1270 del 30 de mayo de 2019 y iv) Auto aclaratorio nro. 121-31-08-0022 del 6 de junio de 2019 no resultan ser susceptibles de control judicial, por expresa disposición normativa.

Así mismo, se denota una ausencia de claridad frente a la pretensión contemplada en el literal f) del ítem “pretensiones” (fl. 1) en la que solicita la nulidad de “la totalidad del expediente coactivo nro. 4881-38870.660 respecto del predio identificado con el código catastral (040100031289000) actual (000300050766000)” por cuanto le corresponde al demandante establecer claramente cuáles son los actos que pretende nulitar, se reitera una vez más, en los términos del artículo 101 del CPACA, situación que a criterio de este Tribunal debió ser objeto de inadmisión de la demanda por parte del A-quo según lo establecido en el art. 162-2 ibidem, otorgándole la oportunidad (art. 170 ibidem) al demandante que corrija tal yerro exclusivamente frente a la mencionada pretensión, pues como bien se reconoce en el auto apelado, si pueden existir actos susceptibles de este medio de control y que en últimas, tal inconsistencia suscitada por el demandada no es causal de rechazo de plano.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

²⁴ Ver folio 22.

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el auto Nro. 746 del 12 de diciembre de 2019, mediante el cual, el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali rechazó la demanda instaurada por la Sociedad Arroyohondo Dos Mil S en C.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, se ordena al a-quo que provea sobre la admisión de la presente demanda, respecto al auto de la liquidación oficial del 2 de marzo de 2015, de conformidad con los argumentos expuestos, teniendo en cuenta para el cómputo de la caducidad la fecha en que se notificó el Auto aclaratorio nro. 121-31-08-0022 del 6 de junio de 2019.

Así mismo, el A-quo deberá inadmitir la demanda frente a la pretensión del literal f) del ítem pretensiones, otorgándole la oportunidad (art. 170 ibídem) al demandante que corrija tal yerro exclusivamente frente a la mencionada pretensión, pudiendo este adecuar sus pretensiones contra los actos susceptibles de control judicial conforme lo establece el art. 101 del CPACA.

SEGUNDO.- Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta Virtual).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los magistrados,

Los Magistrados,



ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS



OMAR EDGAR BORJA SOTO